

La posguerra en Nicaragua y El Salvador 1990-2000.

Violencia y lucha por la tierra

Verónica Rueda Estrada
Unidad Académica Playa del Carmen
Universidad de Quintana Roo

Profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). Coordinadora de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública en la Unidad Académica Playa del Carmen. Es Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel I. Su especialidad es la historia contemporánea de Nicaragua utilizando la metodología cualitativa de la historia oral. Ha realizado contribuciones sobre políticas agrarias, territorialidad campesina y el análisis de las organizaciones territoriales y gremiales de los excombatientes de aquel país. Sus últimas publicaciones son:

Sandinismo y pragmatismo político. Generaciones militantes en Nicaragua 1979-2016. *Palimpsesto*. 2017, Vol. VIII, 11, pp. 147-171. Recuperado de <http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/palimpsesto/article/view/2820>

En coautoría con Vázquez Medeles, Juan Carlos. Testimonio Nicaragüense: de los sandinistas a los contras. Por una polémica memoria contrarrevolucionaria. *Kamchatka*. 2016, 6, pp. 463-490. DOI: <https://doi.org/10.7203/KAM.6.7221>

Correo electrónico: vrueda@uqroo.edu.mx

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8892-7729

Resumen

En este artículo se describen de manera comparada, las características del espacio rural nicaragüense y salvadoreño durante la segunda mitad del siglo XX, posteriormente se analiza cómo los movimientos de frontera agrícola de cada país fueron elementos fundamentales que impactaron en la conflictividad desarrollada durante la posguerra, pues la inserción económica de los excombatientes de ambos países tenía como zona de retorno las áreas de vocación agrícola.

Palabras clave: Tierra, inserción civil, campesinos, excombatientes, Nicaragua, El Salvador.

The postwar period in Nicaragua and El Salvador 1990-2000.

Violence and struggle for the land

Abstract

This article compares the characteristics of rural areas in Nicaragua and El Salvador during the second half of the 20th century, and then analyzes how the agricultural frontier movements of each country were fundamental for the impact on the conflict that developed during the post-war period. The economic insertation of excombatants in both countries involved an agricultural vocation.

Keywords: Land, civil insertion, peasants, ex-combatants, Nicaragua, El Salvador.

Introducción

En 1990 durante la desmovilización de la Resistencia de Nicaragüense (RN) se pudo comprobar el origen campesino de una gran mayoría de sus miembros, el gobierno se comprometió -para insertarlos económicamente- a entregarles tierras a cambio de sus armas. Durante la desmovilización del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador se pudo observar que muchos de sus miembros, a pesar de ser originarios de zonas rurales, no tenían la intención de regresar al campo una vez finalizada la guerra.

En los acuerdos de Paz para El Salvador, el mayor peso se dio a las causas del levantamiento social, pero sólo tangencialmente al asunto rural. En el caso nicaragüense, los campesinos abandonaron las actividades agropecuarias para convertirse en combatientes durante la guerra interna y luego al volverse excombatientes buscaron regresar al campo. En ambos casos, desde la última vez que habían trabajado la tierra, las condiciones en los espacios rurales habían cambiado drásticamente tras una década de guerra.

Desmovilización de excombatientes y posguerra

Como parte de un plan general de pacificación para la región centroamericana –conocido popularmente como Plan Arias–, y tras una serie de reuniones entre los presidentes centroamericanos, el 7 de agosto de 1987 tuvo lugar la firma del Acuerdo de Esquipulas II que tenía como objetivo final lograr una paz firme y duradera. Ahí se enunciaron diez puntos que sentaron las bases para lograr poner fin a la guerra; uno de los primeros y significativos pasos fue la desmovilización de la Contra y la reducción de las fuerzas armadas en Nicaragua, posteriormente se dio la firma de los Acuerdos de Paz para El Salvador en 1992 por medio de los cuales se implementó la desmovilización del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la depuración de las fuerzas armadas, y en Guatemala en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz que permitieron la desmovilización de las fuerzas beligerantes, pero por cuestiones de espacio no se profundizará en este último país.

En el caso nicaragüense la desmovilización de la Contra –cuyo nombre oficial fue Resistencia Nicaragüense (RN)– fue pactada después de la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en febrero de 1990, elección que fue para un sector del electorado un plebiscito por el fin de la guerra. El nuevo gobierno presionó para lograr la desmovilización de la Contra, de esta forma la Resistencia Nicaragüense entregó las armas en acuerdo que se basaba en abstractas promesas de inserción civil y productiva, mismas que incluían cincuenta manzanas de tierra por excombatiente, pensiones para discapacitados, su posibilidad de conformarse en un partido político y la inclusión de algunos de sus líderes en el gobierno. Por su parte, el Ejército Popular Sandinista (EPS) permaneció como la institución armada nacional, pero debió reducirse, reorganizarse y cambiar su nombre a Ejército de Nicaragua. Entre abril y julio de 1990 oficialmente un total de 22, 413 ex contras dejaron las armas, posteriormente lo harían cinco mil combatientes del Ministerio del Interior que fueron dados de baja y finalmente, el Ejército se redujo de 80 mil hombres a 16 mil efectivos a través de tres planes ejecutados entre 1990 y 1992 (Rueda Estrada, 2015).

En el caso salvadoreño, el FMLN entregó las armas a cambio de su participación electoral y un acuerdo sobre la reforma del ejército que incluyó: la depuración y reducción de las fuerzas armadas, reforma de la doctrina militar y creación de una nueva policía; reformas económico-sociales (tenencia de la tierra), del sistema judicial y electoral, y la formación de la Comisión de la Verdad¹. Su participación como partido político quedó establecida en septiembre de 1992.

La ejecución del programa de desmontaje de la estructura militar del FMLN tuvo como resultado que un total de 14,612 combatientes entregaron sus armas y en un proceso paralelo se dio la depuración y reducción de las fuerzas armadas, así como la desaparición de la Policía Nacional, por ello se desmovilizaron en ambas instituciones 26,794 activos. Se inició entonces la

¹ La Comisión de la Verdad entregó su informe *De la locura a la esperanza* a finales de 1992, ambos “fueron atacados y desvirtuados por las distintas esferas oficiales, aun antes de su publicación [...] la Fuerza Armada sentenció que el informe era “injusto, incompleto, ilegal, anti-ético, parcial y atrevido” (Orellana Calderón, 2002, p. 1072). En el caso nicaragüense no se estableció ninguna comisión, en el discurso oficial no era necesario pues no ayudaría a la reconciliación

creación de la Policía Nacional Civil conformada tanto por ex guerrilleros como por ex soldados, ex guardias y ex policías (Hynds, 1995). En ambos países, junto con la desmovilización de las fuerzas guerrilleras se reestructuraron y redujeron los órganos de seguridad².

La realidad de los procesos de desmovilización fue diferente a lo planeado, en ninguno de los dos países existían instituciones u organizaciones lo suficientemente fuertes como para cumplir con lo acordado, además de que una vez entregadas las armas y desmovilizadas las fuerzas beligerantes, la voluntad política gubernamental se desvaneció y los fondos internacionales se redujeron considerablemente.

En lo relativo al tema agrario en la coyuntura del proceso de desmovilización y como parte de sus memorias, el ex guerrillero Salvador Sánchez Cerén, actual presidente de El Salvador (2014-2019) escribió en 2009:

“Los repartos de tierra y de financiamiento a excombatientes, hasta la fecha, han sido un rotundo fracaso por la posición de los gobiernos [...]. No han existido políticas de financiamiento y de formación para el sector [...], para la comercialización de excedentes, de acceso a créditos y a nuevas tecnologías productivas. Los productores surgidos de los acuerdos se encontraron sin espacio productivo y comercial porque el gobierno impulsa las medidas económicas neoliberales [...] abandonando a los pequeños productores y empresarios a su suerte [...]. Por consiguiente, los programas de reinserción no lograron el impacto que debieron haber tenido para garantizar a los ex combatientes del ejército y del FMLN su inserción en la sociedad productiva. Por el contrario, actualmente siguen formando parte de los sectores más pobres, abandonados y excluidos” (Sánchez Cerén, 2009, p. 214).

Resulta significativo que de los 14,612 excombatientes del FMLN sólo la mitad, un total de 7,337 manifestaron interés de regresar a las actividades agrícolas, en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de 26,794 sólo 10,624 lo manifestaron, es decir, un poco más de 30% (Hynds 1995). Como contraste, para la Resistencia Nicaragüense de un total

² Las Fuerzas Armadas de ambos países transformaron su estructura, su doctrina, y su relación con las instituciones y la sociedad. Tanto el ejército salvadoreño como el nicaragüense fueron designados como garantes de la soberanía y la defensa nacional, despojándolos de funciones que tuvieran que ver con la seguridad interna y pública. El ejército y la policía quedaron bajo el poder civil, se redujeron y se reestructuraron para garantizar los intereses del Estado y no del gobierno en turno.

22,413 ex comandos que entregaron las armas 16,683, es decir el 67.97% deseaba regresar a las actividades agrícolas (Rueda Estrada, 2015)³. Es entonces evidente la veta campesina de los nicaragüenses desmovilizados y el menor apego al campo de los desmovilizados salvadoreños.

En Nicaragua, la falta de claridad en los acuerdos de desmovilización, el incumplimiento de los mismos por parte del gobierno y la falta de planeación por parte de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) son algunos de los elementos que explican el rearme masivo de excombatientes que en la posguerra lucharon por la tierra; se trató de ex contras y ex sandinistas que formaron los grupos conocidos como Recompas, Recontras y Revueltos que habían guardado las armas por iniciativa propia, en caso de incumplimiento de las autoridades o los agentes financieros. Fue tan masivo el rearme que la Brigada Especial de Desarme (BED) –organización tripartita creada para tal fin– desmovilizó entre 1992 y 1995 a 24,419 rearmados. Durante ese periodo se efectuaron más de mil 500 combates, se tomaron 17 poblados y cientos de fincas, hubo cierre de carreteras, muchas víctimas y pérdidas económicas (Rueda Estrada, 2015).

En el Salvador de la posguerra, si bien existieron brotes de descontento fueron de grupos muy reducidos, básicamente entre los desmovilizados de la Fuerza Armada, ex patrulleros y lisiados de guerra, pero nunca llegaron a significar un problema masivo ni militar. Sin embargo, los excombatientes del FMLN guardaron armas y pertrechos militares al desconfiar del ejército y el gobierno, mismas que fueron guardadas en el país vecino y cuando estalló un arsenal en Managua en mayo de 1993 y se comprobó que era del FMLN, se puso en grave riesgo el proceso de desmovilización y por ello, posteriormente se entregaron todas las armas (Sánchez Cerén, 2009, p. 222). En Nicaragua los Contras también “embuzonaron” armas en grandes cantidades pero, desconfiaban más de sus líderes.

En ambos países existe una enorme frustración entre los excombatientes de ambos bandos, y continuamente han sido protagonistas de una serie de luchas por lograr el cumplimiento

³ El 83% de los desmovilizados de La Contra tenía un origen rural agropecuario, mayoritariamente campesinos sin tierra. El 94 por ciento de los desmovilizados eran originarios de zonas fuera de la región Pacífico. El 60% de los desmovilizados tenía menos de 25 años y la mayoría eran analfabetos. (Rueda Estrada, 2015).

de las promesas de desmovilización, pero por las características de ambos países éstas han sido diferentes; mientras que los nicaragüenses iniciaron el rearme por la tierra, los salvadoreños a pesar de que ciertos sectores han presionado por la transferencia de ésta, sus demandas tiene un carácter más urbano pues el proceso de descampesinización había iniciado décadas antes⁴. Esos procesos campesinos se analizarán a continuación.

Estructura agraria nicaragüense y movilidad campesina en el siglo XX

Nicaragua entró a los mercados mundiales con la agro exportación del café, algodón y carne durante la primera mitad del siglo XX y su crecimiento se dio con la segunda guerra mundial, convirtiéndose en un proveedor principalmente de Estados Unidos. Su poca población – asentada principalmente en el Pacífico, en la zona conocida como meseta de los pueblos– y un gran territorio, facilitaron la producción en gran escala de dichos productos. Sin embargo, la población campesina, productora de granos básicos fue desplazando constantemente la frontera agrícola cuando el algodón y la ganadería se hicieron extensivos en la meseta de los pueblos.

Hasta los años 50 el café, su principal producto de exportación, se sembraba en las faldas del volcán Mombacho, en las sierras de Managua y en la Meseta de Carazo y para los años 60 los centros productores eran Matagalpa, Jinotega, Estelí y Nueva Segovia, en el Norte del país, que entonces se volvieron centros poblacionales importantes y fueron conectados a los mercados internos del Pacífico. Durante este periodo el cultivo del algodón transformó el campo pues empezó a producirse en León y Chinandega que habían sido zonas de explotaciones ganaderas medianas y grandes, así como de producción de granos básicos para el mercado interno por medio de arrendatarios y medieros campesinos (Baumeister, 1996).

⁴ Algunas diferencias se manifiestan desde los acuerdos, por ejemplo, el FMLN solicitó la integración de una parte de su fuerza a la Policía Nacional Civil de reciente creación, ello como parte de la democratización de los órganos de seguridad, pero también como inserción de los guerrilleros a la vida civil. Eso no sucedió en los acuerdos con La Contra, y sólo se solicitó la creación de la Policía del Norte para las zonas de desmovilizados. Con el rearme algunos combatientes fueron incluidos, pero por razones más circunstanciales que como parte de un programa de la ex contra, en ese sentido el FMLN demostró mayor solidez negociadora.

Estas zonas del Pacífico, por su cercanía a los puertos y su productividad fueron apropiadas por Somoza y sus beneficiarios, a los productores tradicionales se les entregaron entonces tierras en Nueva Guinea moviéndose así la frontera agrícola hacia el Caribe. Otro cambio en el agro se dio con la finalidad de cubrir la cuota azucarera para los Estados Unidos después del bloqueo a Cuba, entonces la zona del Pacífico empezó a producirla junto con arroz y en el Norte tabaco. También se empezó a exportar carne y se movieron hacia el departamento de Boaco los hatos ganaderos. Durante el siglo XX la actividad campesina fue la principal actividad en el desarrollo económico nicaragüense, ello en el marco del Mercado Común Centroamericano (MMC) y un leve proceso de industrialización que recibió a muchos campesinos en las ciudades expulsados por el cultivo de algodón y la ganadería (Rueda Estrada, 2013). Se ampliaron los sectores informales y las universidades abrieron espacios para recibir a los hijos de los productores del interior. El crecimiento económico, producto de la agro exportación creó bonanza.

En 1950 Nicaragua exportó 34 millones de dólares, en 1978 se alcanzaron 646 millones. El área algodonera era en 1951-52 de 47,000 hectáreas, en 1977 llegarán a 236,000 hectáreas. El volumen del café se triplica, sucediendo lo mismo con otros productos, principalmente de exportación. Todo esto se resume en una tasa de crecimiento del producto agropecuario entre 1950 y 1977 de 4.7 por ciento anual, una de las más altas en América Latina (Baumeister, 1996).

Cuando inició la guerra insurreccional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sus miembros eran principalmente miembros de sectores urbanizados del Pacífico y de las zonas donde se asentaban los latifundios Somocistas. En el Norte del país, el panorama era diferente, hubo menor presencia guerrillera y aunque era sumamente fuerte y de larga tradición liberal⁵, en esa zona de expansión del algodón tuvieron un peso importante las haciendas de mediana extensión que requieren mano de obra temporal. Algo similar sucedió con las actividades ganaderas, donde los pequeños y medianos productores controlaban a comienzos de los años 70, el 51% del hato ganadero del país. Se trata entonces de una diferencia significativa

⁵ “Mientras que el trabajo [del FSLN] de los sesenta se efectuó en las zonas de Matagalpa en el interior central en las zonas cafetaleras y de frontera agrícola, el de la segunda mitad de los setenta se desarrolló en el Pacífico central (Carazo), Pacífico norte (Chinandega) y Pacífico sur (Rivas)” (Baumeister 1996, p. 275).

con los otros países de la región pues: “Mientras que en El Salvador los grandes productores de café generaban, a fines de los años 60, el 66% de la producción, y en Guatemala la hacían con alrededor del 77 por ciento, en Nicaragua sólo alcanzaban el 30% de la producción, destacándose medianos y pequeños productores” (Baumeister, 1996, p. 247).

En Nicaragua, la producción de granos básicos tenía un mercado interno asegurado y el 70% se producía en las zonas del interior. La gran movilidad de la frontera agrícola siempre funcionó como una válvula de escape a las necesidades de tierra y a las presiones sociales. Si bien existía un sector de campesinos sin tierra, este era menor y el sistema les permitía ser asalariados temporales en el Pacífico –la zona donde se concentraba el grueso del algodón, la caña de azúcar y la ganadería más intensiva- o bien trabajar en diferentes actividades en los cascos urbanos que iban creciendo (Rueda Estrada, 2013). Las causas de la revolución sandinista fueron entonces más de tipo político, así como de la mala distribución de la riqueza y no forzosamente por un conflicto de tierras –aunque la tierra estaba en manos somocistas en el Pacífico como latifundio que incluía a sus allegados-. Como afirma Baumeister: “El rasgo más notorio de la estructura agraria heredada [por la revolución] era la presencia de un importante núcleo de pequeños y medianos productores, alejados de los rasgos típicos del campesinado y del capitalismo agrario. O sea, una suma de campesinos medios, y de una pequeña burguesía extendida” (1996, p. 252).

Podemos entonces dividir el territorio campesino nicaragüense a finales de los años setenta en tres grandes áreas bien diferenciadas:

1.- El Pacífico: zona del latifundismo algodonero, azucarero y ganadero y de pocos campesinos productores. En su mayoría eran trabajadores agrícolas permanentes y semi-permanentes que también trabajaban en zonas urbanas en las pequeñas industrias de tipo artesanal o en servicios. Se trató de la zona más moderna de producción y la mejor integrada a los mercados internacionales, con carreteras y puertos de acceso para la exportación de sus productos.

2.- La región Interior y el Norte: zona de pequeños y medianos productores de café y tabaco, así como de hatos ganaderos y algunos latifundistas, pero principalmente pequeños productores de granos básicos que satisfacían al mercado interno y, una proporción pequeña de trabajadores sin tierra, con posibilidades de rentarla y/o de engancharse temporalmente en las pequeñas y medianas haciendas. Era una zona tradicional de producción, aunque integrada al mercado interno y en el caso del café y tabaco al externo, con deficientes vías de comunicación que hacían necesaria la presencia de intermediarios para la distribución.

3.- El Caribe: amplia zona hacia donde se ha empujado constantemente la frontera agrícola, tierras poco productivas y zona de asentamiento de las comunidades indígenas, no vinculadas a los mercados internos ni externos. A diferencia de otros países de la región sólo hubo un enclave bananero norteamericano de poca extensión, zona de relaciones comunales deficientemente comunicada con el resto del país y de agricultura de subsistencia (Rueda Estrada, 2013).

En las dos últimas zonas los pequeños productores, sobre todo los de frontera agrícola no contaban con títulos de propiedad sobre las tierras ocupadas. La zona del Caribe se encontró por siglos alejada del poder de las autoridades nicaragüenses y de los mercados internacionales⁶, la zona del Norte o Interior que exportaba café y suministraba de granos básicos el mercado interno y finalmente, la zona del Pacífico integrada en el mercado mundial por medio de la exportación agrícola extensiva. Antes de la revolución, el campesinado y los medianos productores tenían un peso social y económico importante, aunque su acceso al crédito bancario, asistencia técnica, salud y educación eran muy limitados.

Cuando el FSLN llega al poder en julio de 1979 se encontró con una estructura agraria diferenciada, pero las políticas se aplicaron sin hacer distinciones. Se trataba de productores agrícolas heterogéneos, desde los grandes latifundistas hasta pequeños productores, todos con fuerte dinamismo en las tres décadas anteriores, aunque también sectores asalariados y con necesidad de tierras debido a la expansión algodonera y ganadera. La revolución sandinista se

⁶ Es importante destacar que los indígenas del Caribe han mantenido un constante comercio con otras comunidades de la zona, más allá de las fronteras formales con Honduras y Costa Rica.

propuso potenciar la obtención de excedentes económicos en el sector exportador para repartir los beneficios entre la población y articular la agricultura de todo el país con procesos agroindustriales (Rueda Estrada, 2013).

La confiscación y estatización de los latifundios del dictador Somoza y sus allegados en el Pacífico dio la posibilidad a sectores de campesinos de acceder a la tierra, pero esta no se hizo por medio de títulos individuales sino colectivos, lo que rompió con los deseos de propiedad del campesinado. La sociedad rural afectada por sus vínculos con el somocismo logró el apoyo de campesinos subordinados a éstos productores e incluso trabajadores asalariados para combatir la revolución. Cuando las políticas estatizantes⁷ empezaron a afectar a los medianos productores, el rechazo se volvió contrarrevolución y fue justo en el Norte del país, donde los pequeños y medianos productores tenían más fuerza, que la Contra se asentó. El ingreso de mestizos al amplio Caribe también provocó el rechazo de los indígenas que paralelamente se armaron. Fue quizá en el Pacífico donde el campesinado apoyó de manera más estable las políticas agrarias, aunque evidentemente con detractores.

Si en un primer momento la Contra estaba conformada por ex guardias somocistas, con las políticas agrarias sandinistas se llegó a un segundo momento donde se sumaron las capas intermedias de propietarios que se levantaron en armas en la defensa de la propiedad privada y de la potencial pérdida de la misma como consecuencia de las políticas revolucionarias. Después se sumaron pequeños propietarios que asociaron revolución con estatización de la tierra y control estatal de la comercialización (Núñez Soto, 1992).

Después de 1984 se dio el primer viraje agrario sandinista cuando se entregaron propiedades no solamente colectivas y cooperativas de crédito y servicios, se permitieron formas semi-colectivas de producción, se desarrolló un proceso de titulación de tierras ocupadas por precaristas y ocupantes de tierras nacionales y se dio la liberalización de la comercialización para

⁷ El Estado revolucionario impulsa “unos 20 grandes proyectos agroindustriales estatales, y unas 40 empresas agropecuarias y de servicios productivos muy intensivos en capital, controladas por un grupo de ingenieros pro sandinistas provenientes de familias tradicionales” (Baumeister, 1996, p. 271-271).

el mercado interno. Posteriormente se redujo el sector cooperativo y se aumentaron las asignaciones a productores individuales, pero sin derecho a la venta de la tierra.

Al cumplirse los diez años de la revolución sandinista en 1989, la producción campesina en Nicaragua era inviable, no sólo por la instalación de las políticas sandinistas y el bloqueo norteamericano, sino principalmente por la guerra misma que había desarticulado el agro nicaragüense. Había una gran cantidad de tierras subutilizadas, disminución de la superficie sembrada –comparada con 1978- y del hato ganadero. Tal vez la consecuencia más grave de la guerra fue que la agricultura nicaragüense “perdió su carácter agro exportador en el sentido de que dejó de generar excedentes en divisas como sector de la economía” (Baumeister, 1996).

En 1990 tuvo lugar la derrota electoral del FSLN, el gobierno de la UNO, encabezado por Violeta Barrios colocó al frente del sector público agropecuario a miembros de la vieja burguesía agro exportadora que pretendían reprivatizar buena parte de las tierras y regresarlas tanto a sus antiguos dueños como a los simpatizantes de la Unión Nacional Opositora (UNO) –la coalición partidaria que permitió la victoria de Violeta Barrios– y con ello reconfigurar el agro de acuerdo a sus intereses. A ésta contrarreforma agraria se agregarían nuevos actores que lucharían por la tierra y en contra de las políticas de la UNO: en primer lugar estuvieron los excombatientes del Ejército Sandinista y de la Contra, a los que el gobierno prometió la asignación de tierras al entregar el arma; luego estuvieron los beneficiarios de la reforma agraria sandinista: cooperativistas y trabajadores de las empresas agrícolas del Estado; en tercer lugar los refugiados y exiliados que regresaban, y por último los demandantes históricos.

Así, las luchas por la tierra durante la posguerra fueron amplias y violentas y afectaron nuevamente a una parte importante de la población, por cuestiones de espacio sólo se mencionará a un sector importante que se opuso a la contrarreforma agraria, los ex combatientes guerrilleros de la contra, pues fueron uno de los principales agentes que lucharon por reconfigurar el agro. Se trató de 22,413 desmovilizados oficialmente, el 83 por ciento tenía origen rural agropecuario, mayoritariamente por su edad y participación en la guerra eran campesinos sin tierra, el 94% era

originario de zonas fuera de la región del Pacífico y el 60 por ciento tenía menos de 25 años y eran analfabetas.

Tras diez años de revolución y guerra contrarrevolucionaria la configuración del campo se había transformado, de la agro exportación y el acceso a los mercados internos a la estatización de la propiedad en medio del conflicto armado. Con la desmovilización de excombatientes de la Contra, el gobierno pretendía hacer una vuelta al pasado de los años de oro de la agro exportación, con grandes latifundios y mano de obra para trabajarla –los ex combatientes que se volverían jornaleros– estos además tendrían tierras propias para auto-consumo, pero la realidad se mostraba diferente, se trataba de cambios sustantivos que conformaron el agro neoliberal globalizado. Es decir, la desregulación de las actividades económicas y la descampesinización de las sociedades agrícolas tradicionales cuyo modo de vida se volvió inviable y así los campesinos habían perdido el rol funcional que habían desempeñado antes de la guerra como productores de alimentos baratos (Rubio, 2009, p. 114).

El asunto campesino en El Salvador durante el siglo XX

Durante buena parte del siglo XX, El Salvador vivió una bonanza económica a nivel macro debido al desarrollo y crecimiento del negocio de la agro exportación, primero se trató del añil y después del café que en la decena de 1940 fue complementado con el algodón y a finales de 1960 con el azúcar que irrumpió con fuerza.

Los terratenientes, estrechamente vinculados con los militares y el gobierno, se apropiaron de las zonas más fértiles y así se fue intensificando una burguesía cafetalera y agro exportadora. En El Salvador no se dieron los enclaves bananeros, tampoco fue un territorio víctima de intervenciones militares norteamericanas por lo que se generó una burguesía más independiente, pero al mismo tiempo cerrada en sí misma. La mayor parte de la tierra productiva fue dedicada a los cultivos de exportación y los pequeños productores fueron lanzados a tierras marginales, por lo que pronto la producción de productos básicos dejó de cubrir las necesidades

del mercado interno. Se recurrió a su importación con la consecuente elevación de sus precios y en deterioro de la economía de la población.

Una característica importante de El Salvador ha sido su gran desarrollo poblacional y su falta de frontera agrícola. La tierra es el recurso fundamental de la producción por lo que los terratenientes la acumularon, así en 1967 el 96% del área cultivable del país estaba ocupada (Gordon 1993, p. 29). En 1969, después de la guerra del Fútbol, miles de salvadoreños regresaron provenientes de Honduras sin un pedazo de tierra para sobrevivir, pues las grandes extensiones de tierra eran propiedad de latifundistas⁸.

Con la instalación del Mercado Común Centroamericano (MCC) se dio un desarrollo industrial, lo que dio origen a una clase obrera, que si bien era pequeña también era más numerosa que en cualquier otro país de la región. Las ciudades de Santa Ana y San Miguel crecieron considerablemente y como ejemplo significativo, la capital San Salvador recibió al 67% del total de migrantes y el 93% de la migración urbana nacional (Cabarrús Pellicer, 1983, p. 138). Sin embargo, su industria –reciente e incipientemente instalada– no era lo suficientemente fuerte como para recibir a tal marejada de migrantes que buscaban empleo en las urbes y así, éstas pronto se volvieron territorio económico de los servicios y de la informalidad.

Si bien el proceso de urbanización había empezado desde los años 50, este había sido gradual. Es así que todavía en 1971 el 55% de la población económicamente activa trabajaba en actividades relacionadas con la agricultura (Gordon, 1993, p. 46). La agro-exportación y la tenencia de la tierra en pocas manos hizo imposible el acceso para los campesinos, y ante la imposibilidad de acceder a la tierra, se intensificó la migración, las actividades en las ciudades cobraron mayor peso y en poco tiempo la sociedad dejó de ser fundamentalmente agraria.

⁸ En este régimen de propiedad [minifundio], la fuerza de trabajo se sostiene la mayor parte del año cultivando una pequeña parcela, ya sea en propiedad o arrendamiento, legal o ilegalmente. Debido a que la producción del pequeño terreno no basta para mantener a la familia campesina, sus miembros deben acudir al mercado de trabajo para completar sus ingresos (Gordon, 1989, p. 23).

En 1974 el gobierno comprendió la necesidad de mejorar la situación en el campo y planeó una reforma agraria, sin embargo; los sectores más conservadores del ejército y de la burguesía agro exportadora detuvieron el proceso. En 1976 se promovió la Ley de Transformación Agraria que consistía en la expropiación de cincuenta mil hectáreas de tierra aldonera del sureste del país. El reparto agrario se había consignado como “el principal instrumento que permitirá modificar la estructura de distribución de la tierra, que es el más importante factor limitante del bajo ingreso de la población rural. La reforma agraria debería también modificar los sistemas precarios de tenencia existente” (Gordon, 1993, p. 166).

De la misma manera que había sucedido en 1974, el conjunto de la burguesía y de la oligarquía salvadoreña se puso en contra del proyecto reformista de 1976. En ese sentido es importante recalcar que la burguesía rural tradicionalmente ha ejercido el control de la agricultura de exportación, por ello detenta el poder agrario y en muchos sentidos el político. En este contexto se dio también la presión de los capitales internacionales que deseaban ingresar en El Salvador en el sector de la agricultura a través de los acuerdos de reestructuración del MCC. Los gobiernos militares estaban obligados a seguir favoreciendo la penetración del capital internacional en el sector agropecuario que [...] siempre estuvo en manos de sectores nacionales (Castillo Rivas, 1980, p. 20). Finalmente, el contexto internacional tampoco fue propicio para la instalación del MCM por lo que fracasaría, manteniéndose la burguesía prácticamente intacta.

La reforma agraria era necesaria no solo para ampliar el mercado interno –al proveerlo de granos básicos producidos localmente– sino para bajar la presión social del campesinado que buscaba tierras y de la población sin empleo en las ciudades y en el campo. Efectivamente, la tierra desde el siglo XX ha sido un recurso escaso en El Salvador: “la inmensa mayoría no ha tenido donde sembrar, en 1961 el 19.8% de la población eran familia sin tierra, en 1975 formaban el 41.1%” (Cabarrús Pellicer, 1983, p. 59).

Además de que no había tierras suficientes, las existentes eran poco productivas, de temporal y a precios elevados, lo que dificultó el alquiler de tierras para quienes podían pagarlo. Durante toda la década de 1970 la situación en el agro salvadoreño era el siguiente:

1. Una burguesía terrateniente dedicada a la exportación de café principalmente, pero también de algodón y arroz, vinculada también a los beneficios de café y a la industria: –en co-inversiones con capitales extranjeros– textil, farmacéutica, papelería, de alimentos procesados, productos químicos y derivados del petróleo y estrechamente relacionada con las estructuras militares que durante décadas habían gobernado al país.

2. Un sector mínimo de pequeños productores, en áreas marginales que vendían su fuerza de trabajo a las empresas agroindustriales en las temporadas de siembra y corte.

3. Una mayoría sin acceso a la tierra, de origen campesino, pero dedicada también a actividades no agrícolas, migrantes a los cascos urbanos, con trabajos en el sector de servicios o en la informalidad.

El sistema salvadoreño de gran propiedad y un limitado minifundio hicieron posible la continuación del negocio agro-exportador, pero, al mismo tiempo, tornaron inviable la vida agrícola del campesinado. Poca tierra y mucha población creaba otro problema pues el exceso de mano de obra la abarataba⁹ y no permitió que el pequeño productor tuviera el dinero suficiente para hacer viable la producción, pues se trataba de tierras en zonas marginales, de mala calidad y sin recursos para insumos, semillas y fertilizantes por lo que el campesino salvadoreño pronto se vio constantemente compelido a abandonar la agricultura. Existe una etapa del desarrollo capitalista en el campo cuando el minifundio se vuelve inviable, para Karl Kautsky se trata de uno de los problemas importantes de la cuestión campesina:

⁹ “Esta sobreoferta de trabajo [...] está determinada por varios elementos estructurales de la sociedad salvadoreña. [...] el explosivo crecimiento demográfico en un territorio sumamente pequeño (casi 5 millones de personas en 21,000 km²), una altísima concentración de la tierra (40% de las tierras cultivables pertenecen al 1% de la población), una tasa de crecimiento demográfico del 3.8% y, finalmente, un desempleo y subempleo del orden del 45%” (Castillo Rivas, 1980, p. 154).

“[...] cuanto más importantes es para el pequeño campesino ganar dinero, más debe éste poner en primer plano la ocupación accesoria y, por lo tanto, abandonar la agricultura [...] su hacienda agrícola es cada vez más irracional (para producir) [...] la gran mayoría de la población agrícola no figura ya en el mercado como vendedora de medios de subsistencia sino como vendedora de fuerza de trabajo y como compradora de medios de subsistencia. Las pequeñas haciendas dejan de hacer la competencia a las grandes explotaciones y aun las favorecen y las sostienen suministrándoles obreros asalariados y comprándoles sus productos” (Kautsky, 1974, p. 198-203).

La imposibilidad de la vía campesina llevó a lo que el sociólogo Cristóbal Key conceptualiza como la “nueva ruralidad” (Key, 2009)¹⁰, una realidad relativamente reciente en América Latina, pero que desde el siglo XIX se dio en Alemania, tal como previamente lo estudió Kautsky (1974). En el caso salvadoreño se empezó a gestar desde 1960 cuando las pequeñas parcelas dejaron de aportar lo suficiente para la sobrevivencia del campesinado y por el otro, un gran número de familias se encontraron imposibilitadas de acceder a la tierra por la alta demanda de ésta. En este contexto de crisis agraria, los trabajadores rurales, los arrendatarios de tierras marginales y los jornaleros fueron migrando a otras ciudades y países para obtener recursos como empleados de la construcción y en los servicios.

Así mismo, los pocos propietarios con tierras se vieron en la necesidad de dejarlas encargadas a las mujeres, ancianos y niños como una actividad secundaria, mientras que ellos y los miembros más jóvenes buscaron la obtención de recursos fuera de su relación con la tierra. Con el paso del tiempo, las mujeres también fueron emigrando, se emplearon como trabajadoras domésticas o en el área de servicios en las ciudades, en la informalidad y por medio de migración estacional o permanente. Con estos flujos se dio una creciente vinculación entre la ciudad y el campo, buena parte de los recursos familiares se obtenían a través de las remesas nacionales e internacionales y se dieron entonces las familias separadas, es decir, algunos miembros en el

¹⁰ Para Key (2009), los elementos de la nueva ruralidad son: actividades rurales fuera de la granja. flexibilización y feminización del trabajo rural, interacciones de los ámbitos rural y urbano y migración y remesas.

lugar de origen y otros en las ciudades salvadoreñas o en otros países; una situación que en la actualidad es cada vez más una constante que un fenómeno¹¹.

Cuando inicia la insurgencia del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la penetración capitalista no era total en el mundo rural salvadoreño: “La misma agroindustria guarda en su seno “restos” de otros modos de producción que se manifiestan en el uso de técnicas incongruentes con el capitalismo desarrollado [...]. De ahí que se justifique la categorización de nuestro capitalismo en disforme, periférico y dependiente”. (Cabarrús Pellicer, 1983, p. 66). La insurrección en El Salvador fue originada, no sólo por la descampesinización –la imposibilidad del modelo campesino de economía– sino también por la falta de posibilidades de sobrevivencia de estos sectores en otras áreas de la economía. Se trató entonces del deterioro de la economía campesina y de la no absorción de su fuerza de trabajo en las industrias ni en la agricultura extensiva.

En marzo de 1980, cuando la guerra había iniciado, el gobierno realizó un intento reformista por medio del Decreto de Reforma Agraria que contemplaba la expropiación de los predios mayores de 500 hectáreas. Se trataba de una alianza contrainsurgente que resultó en la expropiación de “alrededor de la cuarta parte de toda la tierra agrícola del país, incluyendo el 38% de las tierras dedicadas al café [...], el 28% de las tierras de algodón y el 11% de las tierras de caña de azúcar” (Wood, 2002, p. 195-196).

Posteriormente se daría la “expropiación de las propiedades mayores de 100 hectáreas (en las que se encontraban la mayor parte de los cultivos de café y algodón) y el reparto de esas tierras a la población campesina” pero fue “suspendidas por la Junta de Gobierno, debido a la violencia ejercida por las organizaciones paramilitares de derecha contra funcionarios encargados de aplicarlas” (Gordon, 1989, p. 319-320).

¹¹ La alta densidad poblacional y la poca tierra disponible han provocado que la migración salvadoreña sea una constante. Se consideran dos oleadas migratorias, la primera de 1920 a 1969 y la segunda de 1970-1979 a la que se sumaron además de campesinos sin tierra capas medias preparadas que llegaron a Estados Unidos, unas 45,000 personas migraron en esta ola, la mayoría de forma legal a ese país (OEA, n.d.).

La estrategia de guerra del FMLN fue el desgaste de la economía, tanto a empresas del sector privado como público; por ello saboteaban los cultivos de exportación y cobraban “impuestos de guerra” que reducían las ganancias de los sectores agro-empresariales. La estrategia contrainsurgente del gobierno también alteró la estructura del país; como resultado las ganancias de la agro exportación bajaron, hubo fuga de capitales y, sin embargo, paradójicamente los sectores comerciales y de servicios experimentaron un crecimiento considerable. La guerra en sí, incidió en la disminución de las actividades económicas, en el agravamiento del desempleo y en bajos índices macroeconómicos: “De 3,665 millones de colones en 1978, el PIB descendió a 2,870 millones en 1984. Los cálculos del desempleo oscilan entre 30 y el 35% y el deterioro de los salarios mínimos urbanos en un 17% entre 1980 y 1984” (Gordon, 1989, p. 333).

La guerra lanzó a una gran parte de la población a actividades no productivas, como la guerra misma o bien, a migrar hacia zonas y/o países más seguros. Los combates y la inseguridad del conflicto dificultaron la viabilidad de la agro exportación y por ello los grandes propietarios se diversificaron hacia actividades no agrícolas como al fraccionamiento de sus propiedades cercanas a los cascos urbanos para la construcción de viviendas, inversiones en los medios de comunicación o en los servicios. A finales de la década de 1980, la mayor parte de los ingresos de las élites económicas de El Salvador provenían de los sectores comerciales y de servicios y no de la producción, ni de los procesos agrícolas tradicionales (Wood, 2002, p. 196), un viraje importante en tan sólo una década.

La tierra siguió siendo cara, pero ya no para la producción, sino para la habitación. En muchas zonas, esta violencia generó el abandono de propiedades por parte del pequeño y mediano productor, lo que fue aprovechado por algunos latifundistas que por medio de sus relaciones con las fuerzas armadas mantuvieron productivas sus tierras, aunque muy lejos de los niveles alcanzados décadas antes.

El Agro y la posguerra en Nicaragua y El Salvador

Cuando en 1992 se firmaron los acuerdos de paz, la situación del agro salvadoreño había cambiado drásticamente, del floreciente negocio de la agro exportación a una serie de reformas que habían permitido el acceso a la tierra a sectores campesinos demandantes, pero la misma guerra había impedido la viabilidad productiva y la burguesía había invertido sus capitales en los servicios. El Salvador había dejado de ser un país exportador de materias primas para convertirse en una sociedad de servicios y un expulsor de poblaciones de sectores rurales a urbanos y al exterior.

El contenido económico-social de los acuerdos de paz contemplaba el problema agrario por medio de medidas como la transferencia de propiedades rurales a campesinos y pequeños agricultores sin tierras, la creación de una línea de financiamiento para adquirir las tierras a precios de mercado, la creación de un Código Agrario, elaboración de un inventario de las tierras controladas por el FMLN para su transferencia, y la garantía de recursos suficientes para atender la demanda crediticia para el agro (CIDAI, 2002, p. 222)¹². Se inició entonces un Programa Especial de Transferencia de Tierras (PTT) “en las zonas conflictivas que tenían como beneficiarios a los ex combatientes, tanto del Ejército como del FMLN, que en su mayoría eran campesinos, y [también] a campesinos sin tierra legal, a los que se transfirieron las tierras que todavía tenía el Estado” (Sánchez Cerén, 2009, p. 228). En abril de 1993 sólo se habían escriturado 8,765 manzanas, es decir, cerca del 9% de lo pactado. En total fueron beneficiadas 36,089 familias, el área transferida fue de 147,162 manzanas (Handal, 2006, p. 138).

También se puso en marcha un programa de capacitación productiva y gestión, así mismo se implementaron programas de crédito, como parte de estas actividades un total de mil 597 excombatientes del FMLN decidieron participar en las microempresas no agrícolas y para ello se

¹² El Plan de Reconstrucción Nacional tenía como propósito el “desarrollo integral de las zonas afectadas por el conflicto, la atención de las necesidades más inmediatas de la población más afectada por el conflicto y de ex combatientes de ambas partes”; para lo cual “el gobierno promoverá el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales y garantizará la prestación de servicios sociales básicos, e iniciará la rehabilitación de la infraestructura económica y social (CIDAI, 2002, p. 215).

establecieron algunos programas (Handal, 2006, p.70). Por otro lado, para unos 7,000 excombatientes del FMLN que deseaban regresar a la tierra se crearon tres programas: crédito, capacitación y asistencia técnica. En lo que se refiere a crédito, de un total de 6,242 excombatientes del FMLN que se acogieron al programa sólo mil 004 ha[bian] recibido crédito y de manera muy extemporánea cuando ya había terminado el periodo de siembra. [...] La situación es similar o peor para una gran cantidad de ex soldados de la Fuerza Armada que también deben beneficiarse de este programa (Handal, 2006, p. 69).

Como podemos observar, el reparto de tierra fue un fracaso pues no existieron políticas de financiamiento, de capacitación ni de comercialización. Así los productores que debían surgir de los acuerdos se vieron sin un espacio productivo, abandonados a su suerte. “Por consiguiente, los programas de reinserción no lograron el impacto que debieron haber tenido para garantizar a los ex combatientes del ejército y del FMLN su inserción en la sociedad productiva. Por el contrario, actualmente siguen formando parte de los sectores más pobres, abandonados y excluidos” (Sánchez Cerén, 2009, p. 241).

El problema de la tenencia de la tierra, que fue una de las raíces del conflicto armado, no quedó resuelto con la Reforma Agraria, el PTT¹³, ni otros programas.

“A pesar de que se han producido cambios importantes el impacto quedó limitado. Aún existen 360,000 familias campesinas sin tierra (para el 16 de enero de 2002) y está en marcha un nuevo proceso de frustración en el campesinado, por no contar con el apoyo de Estado ni de la cooperación internacional, y por sentirse a la merced de las reglas del mercado impuestas por una política económica neoliberal [...] las tierras más fértiles y más productivas, particularmente del cultivo de café, siguen concentradas en manos de unas pocas familias [...] la tierra transferida por los anteriores programas es de mala calidad” (Handal, 2006, p. 139-140).

¹³ Es importante considerar que durante el conflicto armado muchas tierras fueron abandonadas por los dueños y éstas fueron tomadas y trabajadas por campesinos que apoyaban al FMLN “teniendo en cuenta esta realidad se puso en marcha un Programa Especial de Transferencia de Tierras (PTT) [...] que tenían como beneficiarios a los ex combatientes, tanto del Ejército como del FMLN, que en su mayoría eran campesinos, y a campesino sin tierra legal, a los que se transfirieron las tierras que todavía tenía el Estado” (Sánchez Cerén, 2009, p. 228).

La lógica económica durante la posguerra dificultó el acceso a la asistencia técnica y el financiamiento para la producción agrícola ha estado limitado a los grandes propietarios, por lo que la productividad de los campesinos pequeños es marginal y muchos se ven obligados a vender sus tierras –si es que las tienen-. Esta realidad fue la constante durante los gobiernos de ARENA en la posguerra.

Tanto en Nicaragua como en El Salvador se dio un proceso de reconcentración de la tierra en manos de los antiguos dueños que aprovecharon la precaria situación económica de los excombatientes para readquirir sus antiguas tierras en el mercado o comprar nuevas a precio de “guate mojado” como se dice coloquialmente en la zona. En las economías neoliberales, el flujo del valor destinado al sector financiero y especulativo lleva a que se reduzca abruptamente el gasto dedicado a las actividades productivas, en particular a las agropecuarias, por ejemplo, en El Salvador pasó de 5.2% en 1990 a 1.7% en 1999 (Rubio, 2009, p. 109). Así mismo, la apertura del mercado a las importaciones han hecho que el sector agroalimentario sea desfavorecido (Rubio, 2009, p. 128).

Tanto los acuerdos nicaragüenses como los salvadoreños tienen una fuerte impronta agrícola, sin embargo, también son ambiguos en cuanto a la transferencia de tierras¹⁴. En El Salvador, para abril de 1993 el gobierno sólo había cumplido con el 9% de tierras escrituradas (Handal, 2006, p. 130). En Nicaragua el gobierno sólo cumplió con el 27% de la entrega de éstas a los excombatientes (CENPAP, 1992, p. 2) y estas transferencias no incluyeron suficientes créditos para hacerlas productivas ni tampoco, en la mayoría de los casos títulos de propiedad, ello por el añejo problema de la tenencia en Nicaragua, así las tierras entregadas tenían varios reclamos legales o se entregaban en zonas altas de difícil acceso para sacar la producción, hubo tardanza en la distribución de semillas y éstas no se adaptaron a la mayoría de las zonas. Además del rearme, los excombatientes encontraron la solución a su sobrevivencia emigrando hacia la

¹⁴ En El Salvador “Los acuerdos de paz son bastante ambiguos en cuanto a la transferencia de tierras, asignando la responsabilidad de su concreción a la COPAZ. Hay que indicar que el FMLN siempre defendió que la distribución de la tierra no se limitara a ex combatientes y ex soldados, sino que incluyera a una amplia base campesina pobladora de las zonas de conflicto durante la guerra, o sea a cerca de unas 200 mil familias tenedoras de tierras. La transferencia debía ir acompañada de un programa de crédito a 30 años de plazo y tasas de interés fijas, de un 6% y con 4 años primeros de gracia.(Perales, 2009, p. 8).

zona del Caribe dónde se estableció la nueva frontera agrícola, se trata de tierra poco apta para la agricultura, pero que funcionó y sigue funcionando –aunque con cada vez menos éxito- como una válvula de escape al problema del acceso a la tierra en ese país.

El espíritu campesino de los excombatientes nicaragüenses se demostró en el ciclo agrícola 1991-1992, pese a todos los problemas de la desmovilización y el rearme, sembraron 37 mil manzanas, maíz en un 65%, frijol en un 25, y tubérculos 10% (CENPAP, 1992, p. 7). Casi dos décadas después de su desarme, en 2008 el 18.2% del PIB fue por agricultura, el 30% de su empleo total es la agricultura y el 30% de los ingresos totales de familias rurales provienen de actividades agrícolas (CEPAL- FAO, 2009, p. 13 y 72), lo cual habla de una sociedad todavía mayoritariamente agraria.

En El Salvador las reformas económicas ejecutadas por los tres gobiernos consecutivos de ARENA generaron una economía financiera y de servicios, aprovechando las remesas familiares –que representan el 12% del PIB y el 95% del déficit de la balanza comercial para 2001– y la maquila textil que genera cerca del 60% de las exportaciones totales y un estimado de 65,000 empleos, que representan cerca del 15.4% del empleo industrial y el 2.8% del empleo total de la economía salvadoreña. En estas políticas la peor parte la ha llevado el sector agropecuario, que ha perdiendo importancia dentro del PIB, “al pasar del 16% en 1992, al 12.5% en 2000. La industrial apenas ha incrementado su participación del 22.7% al 23.2% en los años mencionados” (CIDAI, 2002, p.221).

En ambos países la transferencia de tierras a los excombatientes se dio sin una política agraria sostenible, por ello no ha cambiado el panorama de la pobreza y de exclusión rural. Sin embargo, entre 2000 y 2005 en Nicaragua se dio un crecimiento del sector agrícola del 3.2% del PIB, en El Salvador fue de 2.3%. (CEPAL-FAO, 2009, p. 114).

En ambos países el flujo migratorio no disminuyó con el fin de la guerra, por el contrario, se ha incrementado. Las remesas representaban en 2001 en El Salvador 1,920 millones de dólares, el 17% del PIB y en Nicaragua 610 millones de dólares y el 22% del PIB, lo cual revela

el alto grado de dependencia de las economías al trabajo de sus migrantes (Lungo, 2002, p. 874). En Nicaragua se dio primero una migración internacional de los miembros más jóvenes de las familias o de los varones y mujeres hacia la vecina Costa Rica, pero recientemente han cambiado su destino hacia España y Estados Unidos. Los salvadoreños de todas las edades lo hacen principalmente hacia éste último país. Esto es entendible si se considera que en 2000 “Solo el 30.53% de las personas en edad productiva tienen un empleo formal, mientras más del 68% de la población sobrevive trabajando en el sector informal (Handal, 2006, p. 125).

La posguerra en Nicaragua y El Salvador ha sido violenta, pero ya no por razones políticas como en la década de los noventa, sino una violencia de tintes sociales¹⁵, y que es más una constante que un fenómeno. Esta violencia es presentada como parte de una cotidianidad peligrosa que los medios de comunicación han puesto a la luz con una gran dosis de morbo. En El Salvador se trata de problemas de violencia y delincuencia protagonizada por las pandillas juveniles, las Maras, un problema que tiene su raíz en la imposibilidad de ellos y de sus padres de obtener los medios de subsistencia necesarios, lo que los lleva a vivir en cinturones de miseria y en la exclusión.

En ambos países la violencia protagonizada por excombatientes fue una realidad una vez entregadas las armas; en Nicaragua el 16 de febrero de 1991 asesinaron frente a un hotel en Managua a Enrique Bermúdez “3-80”, líder militar de la Contra, previa y posteriormente habían asesinado también a varios sandinistas en sus comunidades de origen o en carreteras y veredas. En 1990 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reportó 30 ex contras y 48 militantes sandinistas asesinados por razones políticas, en 1992 eran 117 los asesinados entre contras y sandinistas (Rueda Estrada, 2015, p. 236). De manera paralela, “En 1993 ya se contabilizaban en más de dos docenas los excombatientes del FMLN asesinados al estilo de los Escuadrones de la Muerte. Habían asesinado a compañeros y compañeras, sobre todo mandos del FMLN como

¹⁵ En el caso nicaragüense la posguerra se manifestó de manera más violenta a través del rearme de excombatientes, hombres y mujeres que buscaban irse a la montaña para conservar una sociedad que había desaparecido de su entorno y buscando el cumplimiento de la dotación de tierras tras entregar el arma. Sobre el tema véase (Rueda Estrada, 2015).

Carmelo, Franco y Francisco Veliz, a quien lo asesinaron cuando cargaba a su bebita llevándola al kinder donde estudiaba” (Peña, 2009, p. 218).

En Nicaragua de dio la violencia del rearme, pero después de 1993 regresa a los niveles de 1990 y ha bajado constantemente; como contraste el aumento se ha dado en la violencia doméstica, sorprendentemente durante la última década del Siglo XX fue menos violento que México –cuya violencia se incrementó a partir de 2006–, abajo de Honduras que tampoco tuvo guerra, y evidentemente, muy por debajo de Colombia, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, sus niveles de pobreza llegaron a ser superiores a los de otros países de la región, solo sobrepasado por Haití. Por su parte, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo; el 2006 ocupó el primer lugar según el Barómetro internacional pues tuvo la más alta tasa de homicidios, muy por encima de los niveles registrados en la guerra, situación que ha sufrido pocos cambios, en 2016 era junto con Guatemala, Colombia, Venezuela, México y Honduras, los seis países más violentos de América Latina y encabezaba la lista de los trece más violentos del mundo (BBC, 2016).

Conclusiones

Nicaragua y El Salvador son países con una larga tradición campesina y de agro - exportación pero con una diferencia: la sustancial frontera agrícola del primero, es prácticamente inexistente desde mediados del siglo pasado en el segundo. En ambos países se buscó integrar a los excombatientes como pequeños productores al mercado mundial –a pesar de los problemas de propiedad y la falta de entrega de tierra– pero desde antes de la guerra las vías campesinas se habían estrechado y en la década de los noventa eran sumamente improbables. Estos sectores no estaban integrados a los mercados y tampoco estaban en la lógica de agricultura de subsistencia. Las agroindustrias tradicionales y neoliberales ya habían empezado a influir en las sociedades campesinas, haciendo inviable la producción en pequeña escala. A ello se sumaban los años improductivos de la guerra y la caída de los precios del café, azúcar y algodón, con ello las

expectativas de inserción productiva de los excombatientes en el campo, chocaba con la realidad y, paulatinamente iban perdiendo el rol fundamental de productores de alimentos.

Se les han impuesto precios no rentables, se ha sustituido la producción nacional por importada, por lo que una amplia gama de actividades no rurales debe hacerse para generar un ingreso viable, tanto por los campesinos que habían permanecido durante la guerra como por los que se incorporaban a la sociedad tras su paso en alguna de las estructuras militares. Esta multiplicidad ocupacional pasó desde vendedores de armas no declaradas hasta el rearme de medio tiempo, desde actividades agrícolas por cuenta propia hasta empleos como guardias de seguridad, todo con la finalidad de reivindicarse como sector emergente de la sociedad de la posguerra.

El regreso de los excombatientes generó el alza en la demanda de servicios en las comunidades que los recibían, llegando a crecer considerablemente hasta convertirse en pequeñas o medianas ciudades. Estas nuevas “ciudades” con poblaciones campesinas en los alrededores han propiciado un mayor número de personas que laboran esporádicamente en la construcción y en los servicios. Aun así y a pesar de la urbanización –impuesta por las circunstancias– en Nicaragua se dio una lucha por la tierra.

La inserción en el campo de los excombatientes en ninguno de los países fue exitosa pero la amplia frontera agrícola nicaragüense funcionó como una válvula de escape a sectores importantes de excombatientes contras; en El Salvador las urbanizaciones fueron las principales receptoras de excombatientes, actualmente la presencia campesina es mínima y parece destinada a la desaparición; en Nicaragua se ha dado un proceso de reconstitución del campesinado, uno que se aferra tanto a la tierra como al modo de vida que obtiene de ella.

La acelerada urbanización de El Salvador, la descampesinización de sus pobladores rurales, el no acceso a la tierra –entre otras razones por la ausencia de frontera agrícola– probablemente sean factores determinantes de los actuales índices de violencia en El Salvador. Esto a diferencia de Nicaragua, cuya violencia es más familiar, que también tuvo una guerra, con

acuerdos de paz incumplidos, pero cuya frontera agrícola sirvió y sirve a los sectores rurales para encontrar viabilidad. Hoy Nicaragua es un país más campesino que El Salvador y también un país más seguro.

Bibliografía

Baumeister, E. (1996). Reforma agraria y organizaciones de pequeños y medianos productores en Nicaragua. En *Estructuras agrarias y movimientos campesinos en América Latina (1950-1990)* (pp. 235–294). España: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BBC. (1 de diciembre de 2016). Cuáles son los 6 países de América Latina que están entre los 13 con peores índices de criminalidad en el mundo. *BBC*. Recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437>

Cabarrús Pellicer, C. R. (1983). *Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento de la organización campesina en El Salvador*. México: CIESAS-Editorial Casa Chata.

Castillo Rivas, D. (1980). *Acumulación de capital y empresas transnacionales en Centroamérica*. México: Siglo XXI.

CENPAP. (1992). *Aportes para la estrategia del desarrollo agropecuario*. Managua: Centro Nacional para la Administración de los Polos de Desarrollo.

CEPAL-FAO- IICA. (2009). *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas. Una mirada hacia América Latina y el Caribe*. Retrieved (www.eclac.org).

CIDAI. (2002). Los Acuerdos de Paz, diez años después. *ECA de La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*. LVII (Número monográfico especial Los acuerdos de paz y la agenda pendiente diez años después), 209–234.

Gordon, S. (1989). *Crisis política y guerra en El Salvador*. México: IIS-UNAM-Siglo XXI editores.

Gordon, S. (1993). *México frente a Centroamérica*. México: IIS-UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.

Handal, S. (2006). *Una guerra para construir la paz*. San Salvador: Ocean Sur y Editorial Morazan.

Hynds, P. (1995). El Salvador: Protests by ex-soldiers & violence cloud peace process as october peace deadline approaches. *Notisur*. Recuperado de <http://ladb.unm.edu/notisur/1995/09/08-055950>

Kautsky, K. (1974). *La cuestión agraria*. México: Siglo XXI.

Key, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? *Revista Mexicana de Sociología*, (4), 607–645.

Lungo, M. (2002). La política migratoria actual del gobierno. una revisión crítica. *ECA de La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*. LVII (número monográfico especial El fenómeno de la migración en El Salvador y la política migratoria del gobierno), 873–78.

Núñez Soto, O. et al. (1992). *La guerra y el campesinado en Nicaragua*. Managua: CIPRES.

OEA. (2014). - .
Recuperado de <http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/117-el-salvador-1-si-ntesis-histo-rica-de-las-migracio-n-internacional-en-el-salvador.html>

- Orellana Calderón, C. I. (2002). Discurso oficial y reparación social. *ECA de La Universidad Centroamericana "José Martí"* LVII, 1067–1091.
- Peña, L. (2009). *Retazos de mi vida. Testimonio de una revolucionaria salvadoreña*. México: Ocean Sur.
- Perales, I. (2009). *Los acuerdos de paz en El Salvador*. México: Ocean Sur.
- Rubio, B. (2009). *Explotados y excluidos. Los campesinos Latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*. México D.F: Plaza y Váldes-Universidad de Chapingo.
- Rueda Estrada, V. (2013). El campesinado migrante. Políticas agrarias, colonizaciones internas y movimientos de frontera agrícola en Nicaragua 1960-2012. *Tzintzun*. 57, 155–95.
- Rueda Estrada, V. (2015). *Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados. Posguerra y lucha por la tierra en nicaragua 1990-2008*. México: Instituto Mora-CONACYT/CIALC-UNAM.
- Sánchez Cerén, S. (2009). *Con sueños se escribe la vida. Autobiografía de un revolucionario salvadoreño*. San Salvador: Ocean sur.
- Wood, E. J. (2002). Un camino insurgente a la democracia. La movilización popular, los intereses económicos y las transiciones de los regímenes en El Salvador y Sudáfrica. *ECA de La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*, LVII (número monográfico especial Los acuerdos de paz y la agenda pendiente diez años después), 189–207.